

Coyhaique, diecisiete de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En estos antecedentes, RUC N° 230011557-4, RIT N° 88-2023, Rol Corte N° 176-2024, comparece don Lorenzo Avilez Rubilar, abogado, Defensor Penal, en representación del condenado Diego Rubén Avendaño Villaseca, quien deduce recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva pronunciada en esta causa, con fecha dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, por el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique, conforme a la cual se condenó a su representado, a la pena de trece años de presidio mayor en su grado medio y a la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por su responsabilidad en calidad de autor de un delito de homicidio simple, en grado consumado, cometido contra Juan Luis Andrés Gallardo Cortés, el día 29 de enero de 2023 en la comuna de Coyhaique; y además, se condena a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 40 UTM, y la accesoria de inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares ,mientras dure la condena, por su responsabilidad en calidad de autor de un delito de tráfico ilícito de drogas, en grado de consumado, cometido el día 13 de marzo de 2023, en la comuna de Coyhaique.

El recurrente invoca, como causales de nulidad, en forma subsidiaria, las contenidas en los artículos 373 letra a) y b), y el motivo de nulidad contenido en el artículo 374 letra f) en relación con el artículo 341, todos del Código Procesal Penal, solicitando así, “se invalide la sentencia recurrida y el juicio oral, señalando el estado en que ha de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVZGXXELPF

quedar el procedimiento, ordenando la realización de un nuevo juicio ante un tribunal no inhabilitado”.

Con fecha 28 de mayo de 2024, se procedió a la vista de la causa, con la asistencia del Defensor Penal Privado, don Lorenzo Avilez Rubilar, y el representante del Ministerio Público, don Miguel Riquelme Cortés; quedando la causa en estado de acuerdo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente invoca como causal principal de nulidad la establecida en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, esto es, cuando, en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia, se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Alega que la recurrida incurre en este vicio desde que el tiempo destinado para las alegaciones de la defensa se encontraron limitados por el Tribunal Oral, siendo claramente perjudicial su actuar, especialmente porque no se permitió que la defensa pueda abordar los abundantes antecedentes expuestos en el juicio, mermando así el ejercicio de la defensa en sus alegaciones, siendo presionado por el tribunal a quo al destinar un tiempo de 07:00 minutos para su alegato de clausura de los cuales ocupó 08:07 minutos , tratándose de un juicio por 2 delitos graves que tuvo una duración de 8 días en jornadas dobles de mañana y tarde, estimando así, que el tiempo otorgado fue indudablemente insuficiente.

Invoca como sustento del recurso el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°3, en relación al justo y racional proceso establecido y a lo contenido en el artículo 8 N°2 letra c) del Pacto de San José de Costa Rica, el que versa así: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVZGXXEPLPF

establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: ...; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;”.

SEGUNDO: Que, correspondiendo el conocimiento de la causal en estudio a la Excelentísima Corte Suprema, ésta mediante resolución de fecha once de abril de dos mil veinticuatro, determinó que “de la atenta lectura de los libelos, lo alegado, -en ambos recursos- en su caso, tal y como señala el Ministerio Público podría corresponder a un cuestionamiento en sentido amplio a ciertas facultades y derechos que le asisten a la defensa, así como a una denuncia a la valoración de la prueba, y en definitiva a la fundamentación de la sentencia, lo que es propio del motivo de invalidación del artículo 374 del Código Procesal Penal, en sus letras c) y e), razón por la que se procederá de la forma que autoriza el artículo 383 ...”, lo que en concreto determina que esta Corte de Apelaciones deberá pronunciarse sobre ella, por lo que debe entrar derechamente a su conocimiento.

TERCERO: Que respecto de la causal absoluta de nulidad prevista en el artículo 374 letra c) del Código Procesal Penal, esto es, “Cuando al defensor se le hubiere impedido ejercer las facultades que la ley le otorga”, se ha fallado por nuestra Excelentísima Corte Suprema en causa rol 1435-2012 : “Si no existe un impedimento real, concreto y efectivo puesto al defensor para que este ejerza un derecho, el rechazo originado en el Tribunal u otro interviniente que le prive del ejercicio concreto solicitado (que se haya pretendido ejercer un derecho o una facultad) no es posible concluir que se haya incurrido en la causal de nulidad esgrimida”.

Que en la especie, la causal de nulidad referida debe ser desestimada, en atención a que no se han configurado los vicios



alegados por la defensa, ya que los hechos sostenidos por la defensa como vulneratorios de sus derechos, no revisten a juicio de este tribunal ad quem la envergadura de impedir a la defensa el legítimo ejercicio de sus derechos, por cuanto ésta tuvo durante todo el transcurso del juicio, la posibilidad de controvertir lo sostenido por la parte contraria, más aún si consideramos que la etapa de juicio oral tuvo una duración de ocho días, desarrollándose en jornadas dobles de mañana y tarde, que de igual forma la defensa pudo interrogar y contrainterrogar a los diversos testigos y peritos del caso, pudiendo objetar las preguntas que se le dirigieron, aún más la misma defensa reconoce que el Juez Presidente otorga a cada una de las partes del proceso, siete minutos para efectuar su alegato de clausura pero en los hechos el defensor ocupó un tiempo de ocho minutos y siete segundos, habida consideración que los alegatos de clausura corresponden a una síntesis y análisis de la prueba rendida en el juicio, estructurada de manera de convencer a los jueces de su posición, la que ya ha sido expuesta y debatida, por lo que, dichas circunstancias no constituyen un vicio invalidatorio.

CUARTO: Que, en forma subsidiaria, el recurrente dedujo la causal de nulidad establecida en el artículo 373 letra b), del Código Procesal Penal, esto es, cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, y en la especie, ésta se configuraría al determinar que el acusado ha participado en la ejecución del ilícito en calidad de autor, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

Indica que de dicho numeral fluyen dos variantes, por un lado la del autor directo e inmediato –en el caso sub judice, el que dispara – y una segunda variante que tiene que ver con el que toma participación



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVZGXXEXLPF

en los hechos impidiendo o procurando impedir que se ejecute. Respecto de esta segunda hipótesis normativa, el recurrente advierte que para entender qué significa que una conducta constituya impedir o procurar impedir que se evite la ejecución del hecho, debe acudirse a diversas opiniones doctrinarias, citando para ello al profesor Enrique Cury quien sostiene que las conductas que se incluyen en la segunda variante del artículo ya mencionado, deben materializarse en actos incorporados a la ejecución, pero que no necesariamente implican la realización del tipo, sin embargo, no otorga un aporte para diferenciar las distintas conductas.

Agrega que en los casos en que la participación no calce exactamente en la descripción señalada en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, deberá encuadrarse necesariamente en el artículo 16 del mismo cuerpo normativo, la que estima es residual del artículo 15.

Expone que los hechos descritos en la acusación son distintos de los establecidos por los sentenciadores, por cuanto el Ministerio Público le atribuye al acusado haber trasladado a un pasajero y luego huir, mientras que el Tribunal a quo le adjudica haber conducido el móvil en el cual el autor dispara y luego darse a la fuga, así las cosas, en ninguna de las dos descripciones fácticas se indica algo parecido a haber impedido o procurado impedir la ejecución del hecho, que es lo exigido por la ley.

En virtud de lo ya expuesto es que la defensa estima que el tribunal ha efectuado una errónea aplicación del derecho, el que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que se le atribuyó participación como autor al tenor del artículo 15 N° 1, en su segunda variante sin que la descripción fáctica de participación calce con lo exigido en la norma, por cuanto no se indica ninguna conducta de impedimento o de evitación de impedimento en la ejecución del hecho, y



en ese sentido, lo que en realidad debió ocurrir es la absolución o en su defecto la atribución de participación en calidad distinta.

QUINTO: Que resulta importante señalar que la nulidad de una sentencia en materia penal sólo procede por la causal en análisis cuando se ha producido una errónea aplicación del derecho a los hechos establecidos en la misma. Esta errónea aplicación del derecho se produce cuando: i) el tribunal falla en oposición al texto expreso de la ley; ii) existe una interpretación equivocada de la ley o cuando el tribunal otorga a un precepto legal un alcance diferente al que debiera tener; y iii) se produce una aplicación incorrecta de la ley, es decir, cuando se aplica una ley a un caso no regulado por la norma o cuando el tribunal omite la aplicación de la ley a los casos para los que ésta ha sido dictada.

Es importante destacar que los casos de errores de derecho que pueden conducir a la anulación de una sentencia se refieren principalmente a infracciones al derecho sustantivo o de fondo. Sólo de manera excepcional se consideran las infracciones a normas procesales, siempre y cuando estas tengan un carácter decisivo en la resolución de la controversia.

SEXTO: Que la defensa argumenta una errónea aplicación del derecho, sosteniendo que el Tribunal atribuye al acusado una participación como autor al tenor del artículo 15 N° 1 del Código Penal, en su segunda variante sin que la descripción fáctica de participación calce con lo exigido en la norma, sin embargo, el recurrente no desarrolla en su libelo recursivo cuál sería el grado de participación en los hechos denunciados, limitándose a señalar que el actuar de su defendido no se encuadra dentro del citado artículo, por lo que al no calzar en dicha descripción necesariamente debería de aplicarse el artículo 16 del mismo cuerpo legal, por tener un carácter residual, esto



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVZGXXEXLPF

es, la calidad de cómplice, o yendo más allá, que debía proceder la absolución.

Sin embargo, se advierte que en el motivo Décimo Segundo de la sentencia impugnada, el Tribunal razonó que en lo referido al delito de homicidio simple previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, Avendaño Villaseca tuvo participación en este, lo que se ve reflejado en la posición más ventajosa en que se encontraba frente a la víctima, teniendo por completo el dominio de la acción desde el móvil. Es decir, la sentencia precisa que el acusado desde el móvil que maneja se posiciona para que otro dispare a la víctima, quien se encontraba de pie fuera del vehículo y acercándose desarmado, encontrándose los hechos en situación de ventaja.

SÉPTIMO: Que, de conformidad a lo razonado, se estima que los sentenciadores calificaron correctamente la participación de Avendaño Villaseca como autor en los términos expresados por el legislador en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, no advirtiendo este tribunal de Alzada infracción de ley como la denunciada, toda vez que la conducta del acusado descrita en la sentencia evidencia que tomó parte en la ejecución del hecho punible, lo que comprende la situación fáctica global, esto es, su actividad fue un elemento determinante que formó parte en la perpetración del hecho ilícito, por cuanto, se probó que el acusado, era quien conducía el vehículo que permitió la huida del autor material del delito, que igualmente empleó diversas maniobras para posicionar el vehículo cerca de la víctima, existiendo audios que fueron incorporados como prueba durante el proceso que dieron cuenta del conocimiento que tenía sobre la existencia de armas de fuego en el interior del vehículo. Este tipo de participación, demuestra que pese a que el coautor no ejecuta directamente el acto delictivo, tiene un control funcional sobre su desarrollo, que es desde el vehículo, más aún, si



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVZGXXEXLPF

posterior a la comisión del hecho punible deciden darse a la fuga en el mismo móvil.

Que, a mayor abundamiento, el recurrente tampoco explica de qué manera la decisión a la que arriban los sentenciadores ha influido de manera sustancial en lo dispositivo del fallo, toda vez que omite indicar un elemento fundamental, en razón de que se limita a sostener que al actuar del acusado podría recaer en la hipótesis del artículo 16 del Código Penal o en la absolución del acusado, sin expresar de manera clara cuál es la norma que se debió aplicar al caso en concreto y a los hechos establecidos en el proceso, no siendo labor de este Tribunal de Alzada efectuar tal determinación, motivo suficiente para desechar la presente causal.

OCTAVO: Que, en forma subsidiaria, el recurrente dedujo la causal de nulidad establecida en el artículo 374 letra f), del Código Procesal Penal, esto es, cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción a lo señalado en el artículo 341 del Código Procesal Penal, norma que establece, en su inciso primero, que “La sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidas en ella.”, lo que se ve manifestado en las diferencias presentes entre la acusación y la sentencia, las que van más allá de la mera relación de género a especie, incorporando nuevos elementos que son trascendentes en la decisión de la condena.

En primer lugar, respecto al delito de homicidio simple, la sentencia señala que “conducía un automóvil marca Nissan, llegando al servicentro Copec ubicado en Av. Ogana de esta comuna, y un pasajero en el asiento trasero”, lo que constituye una ampliación de los hechos, por cuanto elimina la expresión contenida en la acusación fiscal, “trasladando”, estimando que ello implica una suerte de vinculación o



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVZGXXEXLPF

dominio fáctico del suceso, dejando abierta la posibilidad del concierto, cosa que no fue señalada en la acusación.

En segundo lugar, respecto del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, expone brevemente, que del contenido de la acusación, esto es, “en ejecución de la orden de detención judicial y de entrada y registro para dicho domicilio, que se encontraban dictadas con motivo del hecho uno respecto del imputado Diego Avendaño”, se vislumbra, que en la posterior sentencia impugnada, los hechos son ampliados, señalando así, “luego de una diligencia de entrada y registro ejecutada por la policía”, estimando que ello conlleva a desconectar el segundo hecho con el primero, lo que afecta el derecho a poder dar cuenta de lo causal del hallazgo de las sustancias prohibidas.

NOVENO: Que, en relación a la causal de nulidad invocada, el artículo 374 del Código Procesal Penal señala: “Motivos absolutos de nulidad. El juicio oral y la sentencia serán siempre anulados: f) Cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción de lo prescrito en el artículo 341...”.

A su vez, el referido artículo 341 del mismo cuerpo legal dispone, en lo pertinente: “Sentencia y acusación. La sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ellos.”

DÉCIMO: Que, es del caso señalar que el principio de congruencia, en materia penal, presume una correlación entre los hechos de la acusación y de la sentencia que se dicte al respecto.

Al respecto, la Excma. Corte Suprema ha señalado que para que la causal propuesta pueda ser atendida, “la variación fáctica consignada en la sentencia debe ser idónea para viciar el pronunciamiento, lo que acontecerá cuando medie una alteración trascendental de circunstancias aptas para sorprender a la defensa que, de haber sido



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVZGXXELPF

conocidas, le habrían permitido representarse otros elementos probatorios y/o argumentos, adecuando su alegato en lo material y técnico o bien, al mismo imputado para ejercer su derecho a ser oído. Entonces, el reconocimiento de este principio supone que se haga conocer al imputado oportunamente y en forma detallada los hechos que constituyen la base y naturaleza de la acusación, lo cual implica que pueda contar con información suficiente para comprender los cargos y para preparar una defensa adecuada.” (Sentencia Corte Suprema ROL 2900-2019).

Por su parte el Tribunal Constitucional en sentencia dictada en causa Rol N° 2314-12-INA., ha sostenido: “DECIMOTERCERO: Conforme a lo anterior, el principio de congruencia puede definirse como aquel elemento del debido proceso que obliga al juez a dictar una sentencia coherente con la investigación penal, pudiendo fallar sólo respecto de los hechos y las personas materia de la acusación fiscal, asegurando de esta forma una investigación penal racional y justa, así como una adecuada defensa jurídica;”

UNDÉCIMO: Que, al efecto, en el considerando Octavo del fallo recurrido, el Tribunal a quo establece como hechos lo siguiente:

“Hecho 1

El día 29 de enero de 2023 en horas de la madrugada el acusado Diego Avendaño Villaseca conducía un automóvil marca Nissan, llegando al servicentro Copec ubicado en Av. Ogana de esta comuna, y un pasajero en el asiento trasero percuta desde el interior del vehículo 4 disparos aproximadamente, hiriendo a la víctima Juan Luis Andrés Gallardo Cortés, luego de lo cual el acusado sigue conduciendo el vehículo dándose a la fuga. La víctima posteriormente fallece como consecuencia de la herida, que le produce un shock hipovolémico,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVZGXXEXLPF

secundario a la sección de las venas porta y cava en contexto de un traumatismo abdominal por proyectil balístico.

Hecho 2

El día 13 de marzo 2023, en horas de la noche, en el inmueble ubicado en calle Errázuriz N°2870 de esta comuna, luego de una diligencia de entrada y registro ejecutada por la policía, los acusados Diego Avendaño Villaseca y Brayan Haro Vásquez fueron sorprendidos manteniendo en su poder al interior del inmueble, 2,036 kilos de cocaína, 126 gramos de ketamina, arrojando posteriormente parte de la sustancia al techo de un domicilio colindante, tres millones de pesos en dinero efectivo, tres balanzas digitales, 8 comprimidos de clonazepam, sin autorización competente, encontrándose por tanto las sustancias encontradas destinadas al tráfico de drogas.”

DUODÉCIMO: Que, por su parte, la acusación fiscal, consigna los siguientes hechos:

“Hecho 1:

El día 29 de enero de 2023, alrededor de las 02:00 horas, el imputado Diego Avendaño Villaseca, condujo el automóvil Nissan, modelo Juke, P.P.U. SJVJ-67, hasta la Copec de calle Ogana, trasladando a un tercero desconocido en el asiento trasero. Una vez en dicho lugar y con el imputado al volante, el desconocido percuta cuatro disparos en dirección a un segundo automóvil, hiriendo con un balazo a la víctima Juan Luis Andrés Gallardo Cortés, quien falleció a consecuencia de la herida por un shock hipovolémico secundario a hemoperitoneo con sección de las venas porta hepática y cava, en contexto de traumatismo abdominal por proyectil balístico. Luego de ello, el imputado siguió conduciendo su vehículo, dándose a la fuga, llevándose al autor de los disparos.

Hecho 2:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVZGXXELPF

El día 13 de marzo de 2023, alrededor de las 21:25 horas, personal de la PDI se trasladó hasta el domicilio ubicado en Errázuriz N°2870, interior, en ejecución de la orden de detención judicial y de entrada y registro para dicho domicilio, que se encontraban dictadas con motivo del hecho uno respecto del imputado Diego Avendaño. Al ingresar al inmueble, el imputado Avendaño se encontraba junto a Brayan Haro Vásquez, quienes al percatarse de la presencia policial se intentan dar a la fuga por las ventanas de la casa, cayendo cuatro metros aproximadamente, lanzando hacia el techo del inmueble contenedores con polvo color blanco, los que lograron ser recuperados. Ambos imputados poseían al interior del inmueble dos kilos treinta y seis gramos (2.036 kilogramos) de clorhidrato de cocaína, tanto al interior de la casa como de los paquetes que lanzaron al techo y fueron recuperados, al que se le aplicó prueba de campo arrojando coloración positiva para dicho componente y cuyo análisis químico posterior confirmó que se trataba de dicha sustancia. Además, poseían ciento veintiséis gramos (126 gramos) de ketamina, el que fue sometido a la prueba química arrojando resultado positivo. Mantenían tres millones de pesos en dinero en efectivo, tres balanzas digitales utilizadas para dosificar la droga, y poseían ocho comprimidos de clonazepam, cuyo análisis químico posterior confirmó que se trataba de dicha sustancia, no contando con ningún tipo de autorización para poseer los alcaloides ya referidos.

Las sustancias incautadas estaban destinadas al tráfico de drogas.”

DÉCIMO TERCERO: Que, de un examen comparativo de los hechos contenidos en la acusación fiscal y de la sentencia impugnada, no es posible constatar una infracción al principio de congruencia, desde que si bien al describirse los hechos acreditados y plasmados en



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVZGXXEXLPF

la sentencia impugnada no se emplea el término “trasladar”, utilizado en la acusación para referirse a la circunstancia de que en el interior del vehículo que conducía el condenado, también se encontraba un tercero quien percuta los disparos, y que culminan dando término a la vida de la víctima, ello no implica que no exista una correspondencia en cuanto a la conducta ejecutada por el imputado descrita en los hechos contenidos en la acusación fiscal y aquellos que tuvo por acreditados el tribunal, y por los cuales resulta condenado, toda vez que, el principio de congruencia va más allá de una mera discrepancia literal o gramatical, pues exige una coherencia en los aspectos relevantes o sustanciales, de manera tal que la alteración de ciertos vocablos efectuada por el sentenciador en relación al texto acusatorio, en nada afecta respecto de los hechos y las personas materia de la acusación fiscal.

DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, conforme a lo razonado, la causal de nulidad prevista en el artículo 374 letra f) del Código Procesal Penal, no resulta procedente y por ello se rechazará el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado y así se declarará.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto, además, lo dispuesto en los artículos 372, 373, 374, y 384 del Código Procesal Penal, se declara:

Que, **SE RECHAZA**, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por don Lorenzo Avilés Rubilar, abogado, Defensora Penal Privado, en representación del condenado Diego Rubén Avendaño Villaseca, en contra de la sentencia definitiva pronunciada con fecha dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique, conforme a la cual se condenó a Diego Rubén Avendaño Villaseca, a la pena de trece años de presidio mayor en su grado medio



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVZGXXEXLPF

y a la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por su responsabilidad en calidad de autor de un delito de homicidio simple, en grado consumado, cometido el día 29 de enero de 2023 en la comuna de Coyhaique; y además, se condena a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 40 UTM, y la accesoria de inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares, mientras dure la condena, por su responsabilidad en calidad de autor de un delito de tráfico ilícito de drogas, en grado de consumado, cometido el día 13 de marzo de 2023, en la comuna de Coyhaique, en consecuencia el juicio y la sentencia **NO SON NULOS**.

Redacción de la Ministro Titular doña Natalia Marcela Rencoret Oliva, quien no firma por encontrarse haciendo uso de permiso administrativo.

Rol Único de Causa N° 230011557-4

Rol Corte 176-2024 (Penal).



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVZGXXECLPF

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Coyhaique integrada por los Ministros (as) Pedro Alejandro Castro E., Jose Ignacio Mora T. Coyhaique, diecisiete de junio de dos mil veinticuatro.

En Coyhaique, a diecisiete de junio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVZGXXELPF